



PROYECTO FORMULADO POR EL SR.
LIC. MARIANO RAMIREZ VAZQUEZ.
LIC. FAUSTO VALLADO BERRON.

Forma A, Núm. 55

DIRECTO NUM. 1307/57/1a.
LUCRECIA ALBERT DE ORBE.

México, Distrito Federal.- Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Vo.Bo. día siete de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho.

V I S T O el juicio de amparo directo número - 1307/57/1a., promovido por Lucrecia Albert de Orbe contra el acto de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que estimó violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia definitiva pronunciada en el toca a la apelación del juicio ordinario civil seguido por la quejosa en contra de Luis Orbe Bracamontes y Carlos Orbe Cortés; y,

R E S U M E N D O :

Primero:- Los antecedentes del caso, según -- las constancias de autos, son los siguientes:

Por escrito de veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, ante el Juez de Primera Instancia en Tenango del Valle, México, Lucrecia Albert de Orbe demandó en la vía ordinaria civil, de Luis Orbe Bracamontes y Carlos Orbe Cortés, la nulidad del contrato de compraventa que estos últimos celebraron el veintinueve de julio de mil novecientos cincuenta y tres, sobre la casa número [REDACTED] de la Avenida [REDACTED] de esa ciudad; la nulidad de la inscripción del título -- respectivo en el Registro Público de la Propiedad; y la cancelación de dicha inscripción; acciones estas últimas -- que demanda también del Tenedor del Registro Público de la Propiedad del Distrito.- Relató que el [REDACTED] -- [REDACTED], contrajo matrimonio civil con Luis Orbe Bracamontes bajo el régimen

de [REDACTED]; que dentro de esta sociedad, ella y su esposo adquirieron el cuatro de enero de mil novecientos treinta y ocho, la casa mencionada, habiendo puesto la escritura de propiedad a nombre de Luis Orbe Bracamontes, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número 13 a fojas 47 del Libro Primero, volumen tercero, correspondiente al año citado, con fecha diez de febrero; que como su esposo sostenía relaciones ilícitas con otra mujer, la abandonó en el año de mil novecientos cincuenta y tres, llevándose a vivir a su [REDACTED] a la ciudad de México; que en mil novecientos cincuenta y cuatro, Carlos Orbe Cortés la acusó de haber cometido en su agravio el delito de despojo, porque se encontraba viviendo en la casa de referencia y la cual su esposo había vendido en el mes de julio del año anterior; que el proceso fué resuelto de manera favorable para ella, por haber acreditado que desde la fecha en que adquirieron el inmueble, lo ha habitado y usufructuado como dueña, encontrándose actualmente en posesión del mismo; que como la venta simulada del predio sólo la hizo su esposa a su medio hermano Carlos Orbe Cortés, para librarse de la obligación de cubrir los alimentos a que ella tiene derecho como esposa, y la realizó sin su consentimiento, como miembro de la [REDACTED] se ve en la necesidad de presentar esta demanda.

Carlos Orbe Cortés contestó negando a la acción el derecho de acción para demandar la nulidad del contrato de compraventa que celebró con Luis Orbe Bracamontes, pues lo hizo de buena fe y la demandante conoció el hecho desde antes del veintinueve de julio de mil novecientos cincuenta y tres, fecha de la operación, habiendo dado para ello su consentimiento tácito. Expuso que-



Orbe Bracamontes fué la única persona que aportó bie
la sociedad, siendo él sólo quien liquidó el impor-
al precio de la compraventa que pactó con Pedro Orbe,
al convertirse en propietario único del inmueble de que--
se trata, y que la demandante está mintiendo al decir que
no recibe alimentos de su esposo.

El demandado Luis Orbe Bracamontes contestó ne-
gando igualmente a la actora el derecho de acción para de-
mandar la nulidad del contrato de compraventa, fundado en
que han transcurrido más de tres años de su celebración y
en que la demandante dió su consentimiento tácito para la
operación. Negó que la actora hubiese aportado cantidad-
alguna de dinero cuando él adquirió la casa en cuestión, -
y relató que en mil novecientos cincuenta y tres se vió -
precisado a trasladarse a la ciudad de México para aten-
der a su salud, pues se encontraba sumamente grave por --
los disgustos constantes que le ocasionaba su esposa, - -
siendo merced a la intervención de Carlos Orbe Cortés co-
mo pudo librarse de lo que para él constituía un atentado
en contra de su salud y una vida insoportable que su espo-
sa le daba; que en la causa que se sigue a la actora por-
el delito de despojo, aún no existe ninguna resolución --
firme; que no existió mala fe ni simulación en la compra-
venta del predio cuestionado; y que alimentos no le han--
faltado a la actora, por haber dispuesto de todos los in-
gresos del mesón a que se refiere en su exclusivo prove-
cho. (La actora no se refiere en su demanda a ningún me-
són).

El Juez dictó sentencia el diecisiete de abril
de mil novecientos cincuenta y seis, resolviendo: "PRIME-
RO.- Ha procedido la vía civil escrita.- SEGUNDO.- La -
"actora señora Lucrecia Albert de Orbe no probó su acción.
"TERCERO.- En consecuencia, se absuelve a los demanda- -

"dos señores Luis Orbe Bracamonte, Carlos Orbe Cortés y Te-
"nedor del Registro Público de la Propiedad de este Distri-
"to, de la demanda presentada por la señora Lucrecia Albert
"de Orbe, ejercitando la acción de nulidad del contrato de
"compra-venta celebrado entre los dos primeros nombrados,-
"con fecha veintinueve de julio de mil novecientos cincuen-
"ta y tres ante este mismo Juzgado, en funciones de Nota-
"rio, la nulidad de la inscripción del título respectivo y
"la cancelación del mismo título.- CUARTO.- No se hace -
"especial condenación en costas.- QUINTO.- Notifíquese".

Segundo:- Inconforme con dicho fallo, la acto-
ra lo recurrió en apelación y, substanciado el recurso, la
Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
con fecha nueve de enero de mil novecientos cincuenta y --
siete, pronunció resolución confirmándolo y no haciendo es-
pecial condenación en costas. Esta es la sentencia que aho-
ra constituye el acto reclamado.

Tercero:- La demanda de amparo, presentada -
en tiempo, fué admitida el dieciséis de abril de mil nove-
cientos cincuenta y siete; la autoridad responsable rin-
dió su informe justificado. El Ministerio Público se abs-
tuvo de intervenir por considerar que el caso carece de -
interés público. La quejosa solicitó previamente copia -
certificada de la sentencia reclamada. El expediente se-
turnó al relator el catorce de junio de mil novecientos--
cincuenta y siete. La última actuación es de fecha cator-
ce de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO:- La existencia del acto reclamado que
dó comprobada con el informe justificado de la autoridad-
responsable y la copia certificada de la sentencia recla-
mada.

SEGUNDO:- La quejosa expresa en su demanda co-

1307/57
(35)

ceptos de violación e invoca como disposiciones la
es violadas, los siguientes:

10.- En el primer agravio que la actora hizo-
valer en la apelación, señaló como violado únicamente el
artículo 184 del Código Civil, relativo a los bienes que
vienen a integrar o pueden integrar el fondo común de la
sociedad conyugal. La responsable dice que no existe --
agravio porque no hay capitulaciones matrimoniales en el
matrimonio de Luis Orbe Bracamontes y ~~Luz~~ ^{María} Albert de
Orbe, y que en la adquisición de la casa cuestionada a -
favor del marido, la esposa no concurió a la escritura-
ni se dijo que la finca se adquiriría para la [REDACTED]
[REDACTED], ni se inscribió el inmueble ^C nombre de ésta sino
sólo a nombre de Luis Orbe, en el Registro Público de la
Propiedad. Ahora bien, el ^N artículo 183 del Código Civil
dice que la sociedad conyugal se rige por las capitula--
ciones matrimoniales y ^E en lo no estipulado expresa-
mente, debe regirse por las reglas del contrato de socie-
dad, el cual, según ^K el artículo 2691 del mismo ordenamien-
to no requiere ^I forma expresa ni, por falta de ella, deja
el contrato de ^N producir efectos jurídicos. Así, la fal-
ta de capitulaciones que es la que establece el contrato
y la que nos remite a las reglas del contrato de socie--
dad, no prueba ^E que la sociedad conyugal no exista, toda-
vez que en el contrato de matrimonio se dice que se otor-
ga bajo el ^S régimen de sociedad conyugal. Carece de base
legal la afirmación de que los bienes adquiridos por los
cónyuges dentro del matrimonio, no deben ingresar al fon-
do común de la [REDACTED], porque expresamente no
se diga que son para ese fin, pues si así fuera el régi-
men de [REDACTED] dejaría de existir o sería una-
vana ilusión; y no es posible que el Legislador consagre
una institución con fin tan noble como la sociedad conyu

gal, que asegura la estabilidad y firmeza económica del matrimonio, simplemente para que sea letra muerta, pues en la práctica y según las estadísticas, en cada diez mil matrimonios habrá si acaso uno en el que se otorguen específicamente, las llamadas capitulaciones matrimoniales, en escritura pública y con especificación minuciosa de los bienes que deban ingresar en la sociedad conyugal. El argumento de la responsable es, por tanto, anti-jurídico y hasta anti-social, pues en las condiciones prescritas la sentencia combatida no es conforme ni con la letra ni con la interpretación jurídica de la ley, ni con los principios generales de derecho.

2o.- La sentencia reclamada viola los preceptos antes citados en relación con los artículos 2688 a 2691 del Código Civil, porque ambos demandados al producir su contestación, confesaron ser necesario el consentimiento de la esposa para que el vendedor pudiera enajenar la casa en disputa, en cuanto afirman que ese consentimiento lo dió tácitamente por no haber reclamado durante algún tiempo, la nulidad de la compraventa celebrada entre ellos. Confesaron pues que la finca pertenece al fondo de la [REDACTED] del matrimonio Orbe-Albert y que, por ende, era necesario el consentimiento que según ellos la actora otorgó tácitamente. El otro demandado, o sea el Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito de Tenango, al no haber contestado la demanda, incurrió en la sanción de que se le debió haber dado por confeso en el hecho de pertenecer la finca a la [REDACTED], y en todos los demás de la demanda, como expresamente ordena el artículo 599 procesal aplicable. La responsable pasa por alto todo lo anterior, que desvirtúa por completo su argumento de que no existe prueba respecto de que la finca vendida pertenezca a la [REDACTED]



3o.- Para apoyar su fallo, la Sala senten-
cia cita una sola ejecutoria de la Suprema Corte vi-
niente según dice en el tomo CI página 2610, del Semana-
rio Judicial de la Federación. Pero dicha ejecutoria ni
constituye jurisprudencia ni es aplicable al caso, por-
que existe en contra de la misma la confesión de los de-
mandados.

4o.- Se reclamó como agravio en la apelación
la violación del artículo 190 del Código Civil, pero la-
responsable lo declaró ineficaz diciendo que, aunque es-
te precepto establece la nulidad de cualquier capitula-
ción matrimonial, que prescriba que uno solo de los cón-
yuges debe ser responsable de las pérdidas y que uno so-
lo haya de percibir las utilidades, en su concepto no --
hay pruebas de que la finca vendida perteneciera a la [REDACTED]
[REDACTED] con lo que ocurre en una inexactitud,-
pues ya se vió que los demandados confesaron tal circuns-
tancia, suponiendo que la actora hoy quejosa dio su con-
sentimiento tácito para la operación, por no haber ejer-
citado de inmediato la acción de nulidad.

5o.- El artículo 194 del Código Civil deter-
mina que el dominio de los bienes de la sociedad conyu-
gal, reside en ambos cónyuges mientras subsista la socie-
dad, por lo que también este precepto fué violado por la
responsable, cuanto afirma que no hay prueba de que
la casa vendida pertenezca a la [REDACTED] Orbe-
Albert.

6o.- El artículo 183 del Código Civil se re-
fiere a la constitución de la sociedad conyugal a virtud
de capitulaciones y establece que, a falta de ellas, la-
rigen las normas del contrato de sociedad común. El ar-
tículo 2712 del propio ordenamiento, impone al adminis-
trador de la sociedad, que en la conyugal es el marido,

la obligación de recabar el consentimiento de los socios, que aquí es la esposa, para enajenar los bienes de la sociedad. Pero la Sala sentenciadora declaró inoperante el agravio respectivo, con su mismo argumento de que no hay prueba de que la casa vendida perteneciera a la [REDACTED], por lo que también violó las disposiciones aludidas.

7o.- Se violaron los artículos 2180 a 2184 -- del Código Civil, en relación con los numerales 2163 y -- 2164 del mismo cuerpo legal, que se refieren a la simulación de los actos jurídicos y a los actos celebrados en fraude de acreedores, pues la sentencia reclamada afirma que no hay prueba de la simulación en la compraventa cuya nulidad se demanda, puesto que aún cuando se dijo que la venta del inmueble cuestionado se hizo entre hermanos o medio hermanos, lo cual establece la simulación, la responsable afirma que no hay prueba de ello, cuando tal -- prueba consiste en que esos hermanos no negaron al contestar la demanda tener ese parentesco, por lo que debe tenerse por confesado ese hecho del parentesco de hermanos entre comprador y vendedor de la casa aludida. La venta -- atacada es nula porque se hizo entre hermanos y hasta fué clasificada fiscalmente como donación, con el deliberado propósito de no pagar el esposo de la actora los alimentos que está obligado a cubrirle conforme a la ley, y la calidad de acreedora alimenticia de ésta quedó probada -- con la copia certificada del acta de matrimonio, sin que hubiese necesidad de comprobar el pago de alimentos, que dijeron los demandados lo estaba pagando su marido a la hoy quejosa, pues al respecto ésta dijo que se le adeudaban los alimentos, lo cual es un hecho negativo que no está sujeto a prueba. Así, la venta llevada a cabo del inmueble perteneciente a la [REDACTED] se hizo en -



de la agraviada como acreedora alimentista.

8o.- La responsable violó el artículo 599 del Código de Procedimientos Civiles, porque se desentiende de que al contestar la demanda, los reos omitieron responder el hecho de que ellos son medio hermanos, el cual debe tenerse como cierto, ya que el precepto citado establece que el silencio o las evasivas en la contestación de los hechos de la demanda, hará que se tengan por confesados tales hechos. El Tenedor del Registro Público de la Propiedad de Tenango, que también es demandado, fué igualmente omiso al contestar la demanda, respecto al hecho de que la casa en cuestión perteneció a la [REDACTED] Orbe-Albert, por lo que también debió tenerse por confeso a dicho demandado y por cierto el hecho del dominio del predio en favor de la [REDACTED].

9o.- La responsable viola los artículos 388 y 391 procesal civiles aplicables, pues desconoce el valor probatorio de las confesiones expresas de los demandados Orbe Bracamontes y Orbe Cortés, sobre el abandono de la actora sin pago de pensiones alimenticias, sobre el reconocimiento hecho de pertenecer la casa cuestionada a la [REDACTED] Orbe-Albert, y sobre la posesión que la demandante tiene desde hace más de veinte años, sobre el mismo predio. Asimismo les niega valor probatorio a todos los documentos exhibidos por la actora, que son instrumentos públicos y con los que se probaron los mismos hechos que con las confesiones.

10o.- La sentencia reclamada viola los artículos 798, 801, 803, 1135 y 1152 del Código Civil, que se refieren a la posesión que tiene la actora en forma pacífica, pública, continua, de buena fe y con justo título, sobre la finca materia del juicio, posesión que se ataca en el fallo reclamado, ya que su consecuencia inmediata-

es que la demandante quede a merced del falso comprador del inmueble para que, por la fuerza, la despoje del mismo privándola de la posesión legal que sobre él tiene -- desde hace más de veinte años. La responsable dice que el agravio que de esos preceptos se reclaman, es inoperante porque la posesión no fue materia de la litis. Ahora bien, no importa que esta cuestión no hubiera sido materia de litigio, si la sentencia de primera instancia tiene por efecto inmediato la privación de la posesión -- que tiene la actora, pues ésta posee el derecho de defender la misma contra cualquier ataque y, sobre todo, el de ser mantenida en el goce de esa posesión, comprobada plenamente con los instrumentos públicos exhibidos con su demanda inicial.

TERCERO:- Son fundados los conceptos de violación primero a sexto inclusive. Sostiene en esencia la autoridad responsable que el matrimonio Orbe Albert fue celebrado con fecha [REDACTED] con régimen de [REDACTED], -- fecha en la que ya se encontraba vigente el Código Civil actual, que dispone que la [REDACTED] se regirá -- por las capitulaciones matrimoniales que la constituyen; y estando demostrado que no se pactaron dichas capitulaciones, la sociedad conyugal debe regirse por las disposiciones relativas al contrato de sociedad civil; que según el artículo 184 aquélla puede comprender los bienes de que sean dueños los esposos al formarla y también los que adquirieran en el futuro, o sea, que sólo admite la posibilidad de comprender tales bienes; como no existe prueba de que los esposos Orbe Albert hubiesen estipulado, -- que los bienes adquiridos por cualquiera de ellos, quedarán comprendidos dentro de la [REDACTED] y con la escritura de compraventa presentada por la actora, se --

es que la demandante quede a merced del falso comprador del inmueble para que, por la fuerza, la despoje del mismo privándola de la posesión legal que sobre él tiene -- desde hace más de veinte años. La responsable dice que el agravio que de esos preceptos se reclaman, es inoperante porque la posesión no fue materia de la litis. Ahora bien, no importa que esta cuestión no hubiera sido materia de litigio, si la sentencia de primera instancia tiene por efecto inmediato la privación de la posesión -- que tiene la actora, pues ésta posee el derecho de defender la misma contra cualquier ataque y, sobre todo, el de ser mantenida en el goce de esa posesión, comprobada plenamente con los instrumentos públicos exhibidos con su demanda inicial.

TERCERO:- Son fundados los conceptos de violación primero a sexto inclusive. Sostiene en esencia la autoridad responsable que el matrimonio Orbe Albert fue celebrado con fecha [REDACTED] con régimen de [REDACTED], -- fecha en la que ya se encontraba vigente el Código Civil actual, que dispone que la sociedad conyugal se regirá -- por las capitulaciones matrimoniales que la constituyen; y estando demostrado que no se pactaron dichas capitulaciones, la sociedad conyugal debe regirse por las disposiciones relativas al contrato de sociedad civil; que según el artículo 184 aquélla puede comprender los bienes de que sean dueños los esposos al formarla y también los que adquieran en el futuro, o sea, que sólo admite la posibilidad de comprender tales bienes; como no existe prueba de que los esposos Orbe Albert hubiesen estipulado, -- que los bienes adquiridos por cualquiera de ellos, quedarán comprendidos dentro de la [REDACTED] y con la escritura de compraventa presentada por la actora, se --



...rueba que en el contrato por el cual se adquirió el inmueble en disputa, únicamente comparece como comprador Luis Orbe Bracamontes, quien lo compró para sí con exclusión de su esposa y sin manifestar que lo adquiriría para la [REDACTED]; que como en la escritura que sirve de antecedente a la que se ataca de nula, el inmueble aparece registrado a nombre de Orbe Bracamontes, quien lo vendió al otro demandado Orbe Cortés, sin que dicho registro conste a nombre de la [REDACTED], es de exacta aplicación la ejecutoria de la Suprema -- Corte que dice: "Si una propiedad no aparece inscrita -- en el Registro de la Propiedad como de la sociedad le -- gal, es de considerarse que no puede hacerse valer -- contra tercero, cualquier derecho que pudiere atribuirse a dicha sociedad, atenta la expresa prevención del artículo 3007 del Código Civil, según la cual, los actos que se otorguen o celebren por personas que en el Registro aparezcan con derecho a ello, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, en virtud de título anterior no inscrito, o de causas que no resulten del mismo Registro". (Aguilar V. Guadalupe y Coags., Tomo CI, p. 2610 del Semanario Judicial de la Federación).

...bien, no es aplicable en la especie el artículo 3007 del Código Civil, porque la buena fe que invocó el demandado Carlos Orbe Cortés, no fue la buena fe pública registral, sino la derivada de que la actora no se opuso y consistió tácitamente en la venta hecha por su cónyuge, y porque en la especie, tanto el vendedor como el comprador sabían de la existencia de la [REDACTED].

Por otra parte, una correcta interpretación de

los artículos 178, 179, 183, 189, 194, 261, 287, 942, -
1794, 1796 y 1797 del Código Civil, obliga a considerar -
respecto del matrimonio con régimen de sociedad conyugal,
en el que los consortes no celebraron capitulaciones ma-
trimoniales, que la falta de éstas no impide que dicho -
régimen produzca sus efectos, y que esa sociedad por ser
propriadamente una comunidad de bienes debe regirse por las
disposiciones legales correspondientes a ésta. En efec-
to, en la exposición de motivos de la Comisión Redactora
del ante-proyecto del Código Civil para el Distrito y To-
rritorios Federales, aplicable al caso por haberse cele-
brado el matrimonio Orbe Albert en esta ciudad, el [REDACTED]
[REDACTED] se
asienta que; "Se obligó a que al contraerse matrimonio -
"forzosamente pactaran los cónyuges acerca de si esta-
"blecían comunidad o separación de bienes, procurándose-
"por este medio garantizar debidamente los intereses de-
"la esposa en el momento más propicio, cuando el hombre-
"desea hacerla compañera de su vida. De esta manera se
"combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por fal-
"sa vergüenza o mal entendida dignidad, tratar de asun-
"tos pecuniarios cuando se funda una familia, que impe-
"riosamente exige muchos y continuados gastos". Y des-
pués de conocer otros puntos de vista y tomar en cuenta
observaciones, la propia Comisión reiteró; "Se obligó a
"que al contraerse matrimonio, los cónyuges pactaran ex-
"presamente acerca de si establecían comunidad o separa-
"ción de bienes. El Código de 1884 establecía que cuan-
"do los esposos no celebraran ningún convenio sobre su-
"bienes, por disposición de la ley quedaba establecida -
"la sociedad legal. En la Ley de Relaciones Familiares-
"se adoptó el sistema de separación de bienes, cuando --
"los esposos nada pactaban sobre ellos. En el Proyecto-



El nuevo Código se ordena que los que pretenden contraer matrimonio, pacten expresamente la comunidad o la "separación de bienes. Nada debe presumirse en esta materia; los cónyuges arreglarán lo relativo a sus bienes por convenios expresos. La mujer no saldrá perjudicada en este sistema, como algunos pretenden, porque para celebrar el convenio se elige el momento que le es más propicio, cuando el hombre desea hacerla compañera de su vida y con el sistema que se pretende implantar, se combaten perjuicios muy arraigados que impiden por falsa vergüenza o mal entendida dignidad, se trate de asuntos pecuniarios cuando se va a fundar una familia, que imperiosamente exige muchos y continuados gastos. Además es una medida altamente educadora de la mujer, obliga a que al contraer matrimonio, cuide de sus intereses presentes y futuros y a que no abandone enteramente su destino, en manos de quien va a ser su marido".

De esto se sigue, que el legislador fundamentalmente se propuso que pactada la comunidad de bienes no pudiera dejar de producir sus efectos. Así, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el régimen de [REDACTED], debe establecerse que obliga a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que en su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la falta de capitulaciones matrimoniales, no puede originar que no se cumpla la voluntad de las partes, ni se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede determinarse que se considere el matrimonio, como regido por la separación de bienes, contraria al consentimiento de los cónyuges. La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es idéntica a él, puesto

que ésta tiene personalidad jurídica propia, distinta --
de la de los socios, y persigue fines económicos, en --
cambio, aquélla, según su naturaleza, no es sino una --
verdadera comunidad, de mera conservación y aprovecha--
miento mutuo; una propia comunidad de intereses, que --
responde adecuadamente a los cónyuges, que unen sus per--
sonas y sus intereses. Esta comunidad, por principios--
de equidad y justicia, consecuentes con la situación de
mutua colaboración y esfuerzos que vincula a los cónyu--
ges, le da derecho igual sobre los bienes, de manera --
que como partícipes tanto en los beneficios como en las
cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposi--
ciones legales sobre copropiedad, las aplicables para--
resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.
Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones --
matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe--
estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circuns--
tancia, dispone el artículo 183 del Código Civil. Fi--
nalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, --
lo que usualmente se pacta, es que comprenderá los bie--
nes muebles e inmuebles, y sus productos, que los con--
sortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyen--
do el producto de su trabajo y los frutos de los bienes
privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al ce--
lebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulacio--
nes, así debe interpretarse que lo desearon, por ser és--
to además, lo más lógico y conforme a su voluntad mani--
festada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con --
sociedad conyugal.

El mismo criterio ha sido sustentado por esta--
Suprema Corte en la ejecutoria relativa al amparo direc--
to número 2031/57, promovido por [REDACTED] --
[REDACTED] fallado el catorce de febrero del año en curso, --



En la del amparo directo número 5360/56, promovido por [REDACTED] que se falló el diez de marzo del propio año. Ambas ejecutorias se promovieron por mayoría de tres votos de los señores Ministros Ramírez Vázquez, García Rojas y Guzmán Meyra, en contra del voto del señor Ministro Castro Estrada. *HA STA ABO*

Así, es nula la venta realizada por Luis Orbe en favor de Carlos Orbe, por no haberse celebrado con el consentimiento de la hoy que ~~era~~, que por virtud de la [REDACTED] que rige a su matrimonio aunque carente de capitulaciones matrimoniales, es copropietaria del inmueble materia del contrato. No es óbice que la actora hubiese dejado pasar tres años sin reclamar su nulidad, porque no se probó que se hubiese enterado de la celebración del contrato, antes de que el comprador formulara denuncia en su contra por el delito ~~de~~ despojo, en mil novecientos cincuenta y cuatro, máxime que ella siempre estuvo en posesión del inmueble por derecho propio.

De lo anterior resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación séptimo a décimo, pues los anteriores son preponderantes, para determinar la procedencia de la acción de nulidad deducida.

§ En consecuencia, estando acreditadas las infracciones a las leyes ordinarias que se citan en los conceptos de violación analizados, así como las violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, y debe otorgarse la protección de la justicia federal.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo que disponen los artículos 103-I, 107-I, II, III y V de la Constitución Política, 45, 78, 158,

167, 179, 186 y 190 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la propia Constitución y 26-III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

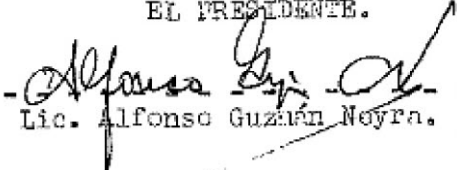
UNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Lucrecia Albert de Orbe, en contra del acto que reclama de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, que hizo consistir en la sentencia definitiva pronunciada el nueve de enero de mil novecientos cincuenta y siete, en el toco a la apelación del juicio ordinario civil seguido por la quejosa en contra de Luis Orbe Bracamontes y Carlos Orbe Cortés.

Notifíquese; publíquese, remítase testimonio de esta resolución a la Autoridad responsable, devuélvanse los autos originales que envió y en su oportunidad archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros González Bustamante, Ramírez Vázquez, ponente, García Rojas y Guzmán Noyra en contra del voto del señor Ministro Castro Estrada quien lo emitió por la negativa del amparo así como por las razones que expuso en su voto particular.

Firman los CC. Presidente y Ministros que integran la Sala con el Secretario de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.

EL PRESIDENTE.


Lic. Alfonso Guzmán Noyra.



LOS MINISTROS:

DIRECTO NUM. 1307/57/1a. Lic. José Castro Estrada.
LUCRECIA AL
BERT DE OREE.

Lic. Juan José González Bustamante

Lic. Mariano Ramírez Vázquez

EL SECRETA
RIO DE ES-
TUDIO Y
CUENTA.

Lic. Gabriel García Rojas.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SALA.

Lic. Abelardo Cárdenas Mac-Gregor.

SE



TO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MINISTRO LICENCIADO JOSE CASTRO ESTRADA RESPECTO DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN EL AMPARO DIRECTO NUMERO 1307/57/1a. PROMOVIDO POR LUCRECIA ALBERT DE OREE.

Disiento de la opinión mayoritaria y niego el amparo solicitado por las siguientes consideraciones:

1.- El código civil de 1870, y el de 1884, distinguieron entre el régimen de separación de bienes y el de la sociedad conyugal; y dentro de esta última, distinguieron la sociedad voluntaria de la sociedad legal, al reglamentar el contrato de matrimonio con relación a los bienes de los consortes (artículos 2131 a 2204 y 1997 a 2022 -Sociedad Legal- y 1986 a 1996 y 2120 a 2130 y 1986 a 1996 -Sociedad Voluntaria- de los códigos de 70 y 84).

La Ley de Relaciones Familiares proscribió el régimen de la sociedad conyugal en su doble manifestación y sólo autorizó y reguló la separación de bienes entre los cónyuges.

El código de mil novecientos veintiocho, vigente desde mil novecientos treinta y dos en el Distrito Federal, conservó el régimen de separación de bienes pero permitió también el de la sociedad conyugal, identificando a ésta con la antigua sociedad voluntaria de los códigos de setenta y de ochenta y cuatro (artículos 183 a 206). De los párrafos de la exposición de motivos de este último ordenamiento que se insertan en la ejecutoria del que este voto particular forma parte, resulta evidente la voluntad expresa del legislador en el sentido de que sólo hay sociedad conyugal cuando los consortes voluntariamente celebran el contrato con las capitulaciones matri

moniales correspondientes. De lo contrario, la llamada sociedad conyugal no existe.

Así es como el artículo 98 del código civil en vigor dispone que, al escrito que las personas que pretendan contraer matrimonio presenten al Oficial del Registro Civil, acompañarán el convenio que deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquirieran durante el matrimonio, en el cual expresarán con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad legal o bajo el de separación de bienes. No puede dejarse de presentar este convenio, ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquirieran durante el matrimonio. Y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber, a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Conforme al artículo 99, en los casos en que los pretendientes por falta de conocimientos, no puedan redactar dicho convenio, el propio Oficial tendrá obligación de redactarlo con los datos que los mismos pretendientes le suministren. A la necesidad de cumplir con estas disposiciones de interés público, que no admiten sean renunciadas, ni tampoco inobservadas por la voluntad de los particulares, obedeciendo que los Oficiales del Registro Civil como es bien sabido, tengan impresos ejemplares del convenio a que se contrae la fracción V del artículo 98 del Código Civil, a disposición de los contrayentes de matrimonio bajo sociedad conyugal, en los que es usual pactar que atañe a bienes futuros, por no tener los presentes, y que comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes --



quieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo, y que cada consorte tendrá en ellos la participación del cincuenta por ciento, así como que la sociedad conyugal se liquidará conforme a las bases que establece el mismo Código Civil.

Además, el artículo 178 del código civil del Distrito Federal establece que el matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes, y el 179 define las capitulaciones matrimoniales como los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y otro caso. Por otra parte, el artículo 183 del mismo código establece que la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

De conformidad con estos preceptos puede afirmarse que para que la sociedad conyugal tenga existencia se requiere la celebración de capitulaciones que la constituyan. No basta, en consecuencia, para ese efecto, la simple manifestación de los cónyuges en el sentido de que el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal.

Esta conclusión encuentra apoyo además en las siguientes consideraciones: de acuerdo con lo que establece el artículo 189 del código civil, las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal debe contener, entre otros requisitos, la lista de los inmuebles y muebles que cada consorte lleve a la sociedad, la declaración expresa de si la sociedad ha de comprender todos los bienes de cada con

40.

sorte o sólo parte de ellos precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad, la declaración de si los bienes futuros que adquirieren los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción. Lo dispuesto en este precepto, que exige el pacto expreso respecto de cuáles son los bienes que deben formar parte de la sociedad, en concordancia con los preceptos anteriormente examinados, y en vista de que el código vigente no -- restableció la sociedad legal, conduce a concluir que de acuerdo con dicho ordenamiento la sociedad conyu-- gal debe ser contractual, y sólo se constituye por me-- dio de capitulaciones convencionales.

Esta conclusión justifica lo argumentado -- por la responsable en cuanto a que la segunda parte -- del citado artículo 183, sólo tiene aplicación cuando habiendo capitulaciones, éstas son omisas en algunos-- puntos, pero no cuando no existen capitulaciones pue-- to que en este caso no puede tenerse por constituida la sociedad. Esto se comprueba con el antecedente del citado precepto, que lo es el artículo 2130 del códi-- go de setenta, relativo a la sociedad voluntaria.

Conforme a lo anteriormente expuesto conclu-- yo que la responsable no estuvo en lo justo al consi-- derar que en la especie existió la [REDACTED] a pesar de que no hubo capitulaciones matrimoniales, -- haciendo una inexacta aplicación de las disposiciones legales que invocó en la resolución reclamada y dejan-- do de aplicar las que señalo en este voto, conculcan-- do en perjuicio del quejoso las garantías constitucio-- nales consignadas en los artículos 14 y 16 de la Cons-- titución, por lo cual le concedo el amparo solicitado.



2.- Por otra parte, si la quejosa demandó la nulidad de la venta de una casa por su esposo, a un medio hermano de éste, porque el inmueble era de la sociedad legal y ella no dió su consentimiento para la venta, establecido que por no haber capitulaciones matrimoniales no hubo [REDACTED] los fundamentos de la responsable en el mismo sentido encuentran su apoyo en las consideraciones que anteceden y en las disposiciones legales invocadas.

3.- Además, la quejosa ~~negó~~ la venta por simulación entre los medios hermanos, para evadir por ese medio su esposo y anular la obligación alimentaria a su cargo.

A este respecto ~~debe~~ decir que la agraviada sólo exhibió copia certificada de la sentencia reclamada y no de las pruebas ~~alegadas~~ para demostrar la simulación; por lo que en aplicación de la tesis jurisprudencial número 302 ~~publicada~~ en el último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, página 568, debe negarse el amparo. Esa jurisprudencia definida dice: "Si el quejoso no acompaña a su demanda la copia certificada de constancias a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 134 de la Ley de Amparo y por tal motivo no se demuestran las violaciones alegadas, debe negarse la protección federal."

4.- En vista de todo lo anterior el suscrito vota por la negativa del amparo.

MINISTRO DISIDENTE.

José Castro Estrada.

